

EVALUACIÓN DE LA CALIDAD EN EL NUEVO CONTEXTO LATINOAMERICANO

JOSÉ JOAQUÍN BRUNNER*

** Presentación ante el Seminario Internacional "Evaluando la Evaluación" de la Red Internacional para el Aseguramiento de la Calidad en la Educación Superior (INQAAHE) Santiago de Chile, 4 de mayo 1999. Presidente de la Comisión de Acreditación de Programas y Director del Programa de Educación de la Fundación Chile.*

América Latina vive un momento de cambios en sus políticas de educación superior. Aunque los resultados son todavía escasos o parciales, y de cualquier forma demasiado recientes como para trazar un balance, ellos apuntan en una misma dirección. En efecto, lo que se busca son respuestas y soluciones para un conjunto de nuevos problemas ¿En qué consisten éstos y cómo condicionan la formulación de políticas dirigidas al sector? Y, ¿en qué medida están influyendo sobre la adopción de mecanismos de aseguramiento y promoción de la calidad? Entonces así, como el profesor Lee Harvey se refería a la micropolítica de la evaluación, yo quiero partir por la macropolítica; el contexto más general en el cual, me parece a mí, hemos empezado a discutir estos problemas.

DEMOCRACIA Y DESARROLLO

Por de pronto, ha mudado el contexto político y económico dentro del cual funcionan las instituciones de enseñanza superior. Efectivamente, al aproximarse el fin de siglo, dos hechos nuevos resaltan sobre el paisaje de la región. Primero, la reimplantación de sistemas democráticos que ponen fin (aparentemente al menos) al ciclo de caudillos, regímenes autoritarios, guerras internas y ensayos revolucionarios que alimentaron la inestabilidad política del continente desde el comienzo de la guerra fría. Segundo, la gradual adopción de economías de mercado abiertas al comercio internacional que aparecen como condición para un nuevo impulso al desarrollo y modernización del continente.

Pero conviene ser cautos a la hora de evaluar este cambio de las circunstancias en que se desenvuelve nuestra educación superior.

Por un lado, todavía hay sociedades donde la violencia es una constante y hay regímenes que marchan al borde del abismo autoritario. La democracia no se ha asentado sino débilmente en la conciencia y la cultura de la región y su institucionalidad es aún precaria. Todavía un tercio o más de la población no cree que la democracia sea preferible a cualquier otra forma de gobierno. La confianza en los poderes ejecutivo, legislativo y judicial es baja. Menos de la mitad de los ciudadanos encuentra indispensables a los partidos políticos en su país¹. Estamos por tanto frente a una cultura política del retraimiento y la confianza. De hecho, América del Sur y del Centro muestran las más bajas tasas de participación electoral entre todas las regiones del mundo, tanto en las elecciones parlamentarias como presidenciales². Esto ha llevado a algunos a hablar de un extendido "cinismo político", que se combinaría con una baja apreciación del rol desempeñado por políticos. Como señalara Octavio Paz en una metáfora que bien puede generalizarse al resto del continente: "el pueblo mexicano, después de más de dos siglos de experimentos y fracasos, no cree ya sino en la Virgen de Guadalupe y en la Lotería Nacional"³. Efectivamente, la Iglesia es la institución que por lejos despierta en la actualidad mayor confianza en la población, muy por encima de los tres Poderes del Estado⁴. Éstos, a su vez, representan la contra-cara de esa democracia culturalmente débil, su precaria estructura: gobiernos sobrecargos de funciones pero que no logran siquiera garantizar los bienes públicos esenciales como seguridad, salud y educación; un proceso legislativo lento y engorroso y sistemas judiciales que se hallan en crónica crisis, sin poder frenar el crimen y la delincuencia, al punto que el costos de la violencia urbana pasó del 0.8% del pib a comienzos de los años ochenta a 1.6% a mediados de los noventa. Se gasta más en combatir la delincuencia que en ciencia y tecnología, más en reprimir las conductas desviadas que en la educación superior.

Por otro lado, si bien es cierto que América Latina ha adoptado un nuevo modelo de desarrollo⁵ que ha llevado a decir que “sin excepción todos los países de la región muestran índices de eficiencia de las políticas mejores en 1995 que diez años atrás”⁶, a pesar de eso, sin embargo, la región permanece entrampada. El crecimiento promedio durante los noventa ha sido un moderado 3.3%. El desempleo ha aumentado. El número de pobres permanece en torno a 150 millones de personas. El nivel promedio de escolaridad de la fuerza de trabajo continua siendo bajo (4.9 años si se pondera por población) y, durante los noventa, sólo ha aumentado a una modesta tasa de 0.9%, inferior a la de los años sesenta (.6%) y muy debajo de la tasa de un 3% anual observada durante más de tres décadas en Corea, Taiwan, Singapur y Hong Kong.

No debe extrañar que, en tales condiciones, se extienda por la región un clima finisecular de aprehensión e incertidumbre. Sólo un 10% de la población estima que la situación económica actual de sus países es buena; menos de un tercio piensa que su país está progresando; un 76% cree que ahora hay más pobres en su país que hace cinco años y alrededor de un 40% se declara muy preocupado de quedar sin trabajo o estar desempleado durante los próximos doce meses. Dos tercios o más de las personas cree que en su país están aumentando la delincuencia, el narcotráfico, la drogadicción y la corrupción.

En suma, las políticas de educación superior de los años noventa encuentran ante sí este nuevo contexto; un contexto de democracias que aspiran a ampliar la esfera de la ciudadanía y a cimentar una cultura cívica más madura, en medio de unas economías que, a pesar de su vitalidad, no logran sin embargo sostener un crecimiento alto y sostenido. Lo anterior significa que hay, simultáneamente, más demandas y más restricciones. Ya veremos de qué manera esto condiciona las políticas gubernamentales y el comportamiento de las instituciones de educación superior.